RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023.

RECURRENTE: CONSEJERA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL.

MINISTRO PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I.	COMPETENCIA.	Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso.	26
II.	PROCEDENCIA.	El recurso de revisión en materia de seguridad nacional es procedente.	27
III.	LEGITIMACIÓN.	El presente recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada.	27
IV.	OPORTUNIDAD.	El recurso de revisión se presentó de manera oportuna.	28
V.	MATERIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.	Se establece la naturaleza y alcance del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, conforme a los precedentes de esta Corte.	29
VI.	MARCO NORMATIVO QUE RIGE AL RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL (ASPECTO PRELIMINAR).	Se precisan las normas que rigen la presente revisión, conforme a los precedentes de este Tribunal.	31
VII.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	Para el examen del recurso de revisión se parte de la base de que lo	46

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

		efectivamente solicitado por el particular, consiste en la resolución recaída el proyecto identificado con el número 23QR2022V0050, denominado <i>“Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”</i> , específicamente, la que tiene que ver con la respuesta al trámite de la autorización del cambio de uso de suelo forestal para la ejecución del citado proyecto.	
VIII.	ESTUDIO. 1. La información relacionada con el derecho a un medio ambiente sano no pone en riesgo la seguridad nacional.	Este Tribunal Pleno considera que no le asiste la razón a la recurrente, en el sentido de que el acceso a <u>la totalidad</u> de la información potencializa un riesgo o amenaza a la seguridad nacional porque, lo que en realidad autorizó el INAI es que el sujeto obligado entregara al solicitante, únicamente la versión pública de la resolución dictada en el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, recaída al proyecto denominado <i>“Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”</i> , en los términos indicados en la propia resolución ahora recurrida.	48 51
	2. No es procedente la reserva de la información por seguridad nacional, con base en un decreto que así la clasifica de manera anticipada y general.	Resulta infundado el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que, no se trata de actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos y no representa la destrucción, inhabilitación o sabotaje de infraestructura de carácter	63

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

		estratégico.	
	3. Es procedente la entrega de la versión pública de la resolución del trámite al cambio de uso de suelo forestal.	Es infundado el agravio relativo a que la resolución recaída al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, no puede ser fragmentada, reservando solo la que involucra las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, tal y como lo resolvió el INAI, en virtud de que de cualquier modo se estaría divulgando información que atañe al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.	68
IX.	DECISIÓN.	PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión RRA 9855/23, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil veintitrés.	71

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023.**

**RECORRENTE: CONSEJERA JURÍDICA DEL
EJECUTIVO FEDERAL.**

PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día **dos de julio de dos mil veinticuatro**, por el que se emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el **recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 5/2023**, promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y por el que impugnó la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante INAI o Instituto), de tres de octubre de dos mil veintitrés, en el expediente del recurso de revisión RRA 9855/23, derivado de la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 330026723002457.

ANTECEDENTES.

1. **Solicitud de acceso a la información.** El trece de junio de dos mil veintitrés se presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia identificada con el número de folio **330026723002457**, mediante la cual se requirió a la

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante SEMARNAT) la siguiente información:

LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE AÉREA MILITAR Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE CARRILLO PUERTO (TULUM, Q. ROO) QUINTANA ROO"; RESPECTO A UN TRÁMITE DE (sic) "UNIFICADO DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL, MODALIDAD B, CON RIESGO". (23QR2022V0050).

- SE PIDE LA INFORMACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ASÍ COMO LOS ANEXOS O DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE RELACIONE CON TAL AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

- SE PIDE LA INFORMACIÓN EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN, ASÍ COMO LOS ANEXOS O DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE RELACIONE CON TAL AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

- SE PIDE LAS OPINIONES Y/O INFORMES QUE SE HAYAN APORTADO PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN CUESTIÓN, EN SU VERSIÓN PÚBLICA.¹

2. El sujeto obligado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y mediante el oficio número SEMARNAT/UCVSDHT/UT/2492/2023, de fecha once de julio de dos mil veintitrés dio respuesta a la solicitud, en los siguientes términos²:

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 61, fracciones II y V, y Transitorio Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en correlación a los numerales 1º; 3º, Apartado A, fracción IV; y 29, fracciones XII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de Julio de dos mil veintidós, se notifica la respuesta a su solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el número de folio **330026723002457**, que consiste en:

[Se transcribe solicitud]

En respuesta a su solicitud, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), le notificó a esta Unidad de Transparencia lo siguiente:

De conformidad con las atribuciones previstas en los artículos 1, 3, párrafo primero, Apartado A, fracción II, inciso c), 8, 9 y 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esta Dirección General, realizó la búsqueda exhaustiva en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT) y en el Sistema de Información Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental

¹ La información consta en la foja 241 del expediente.

² Tal y como consta en las fojas 243 y 244 del expediente.

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023

(SIGEIA), así como en los archivos físicos y digitales con los que cuenta esta unidad administrativa. Al respecto, la información relacionada con el proyecto **Tren Maya** se considera clasificada como **reservada por seguridad nacional**; por lo cual, la DGIRA la somete a aprobación del Comité de Transparencia y de la SEMARNAT, conforme el cuadro que se describe a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE CLASIFICA COMO INFORMACIÓN RESERVADA	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL
<p>Expedientes 04CA2020V0009 31YU2021V0047 23QR2022V0037 23QR2022V0020 23QR2022V0040 04CA2022V0020³</p> <p>Aeropuerto de Tulum, Quintana Roo.</p>	<p>La información solicitada, si llegara a ser entregada o divulgada, puede poner en RIESGO LA SEGURIDAD NACIONAL.</p>	<p>Artículos 104 y 113, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Artículos 6, fracción II y 54 de la Ley de Seguridad Nacional.</p> <p>Artículo Único del DECRETO por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, publicado el dieciocho de mayo del dos mil veintitrés.</p> <p>Décimo noveno, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.</p>

[...]

De conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la LGTAIP se justifican los siguientes elementos de prueba de daño:

- 1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.*

Daño real: En razón de que la información relativa a las estructuras y

³ Se advierte que en este apartado no se relaciona el número con el que se identifica el trámite solicitado, esto es, **23QR2022V0050**.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

operaciones autorizadas dan cuenta de la construcción por parte de SEDENA del Tren Maya, hecho notorio, dicha información de ser divulgada podría ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional (Secretaría de la Defensa Nacional); sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent.

Daño demostrable: No solo la delincuencia organizada que **impide** la realización correcta de las actividades de SEDENA, la SEMAR, la Policía Federal, FGR, etc., sino manifestantes también (sic) atacan a las instalaciones y a los militares, véase también:

[...]

Daño identificable: Aprovechamiento de información de material de instalaciones y su disposición específica en los predios, así como materiales de construcción de las instalaciones por la SEDENA.

II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.

Pone en peligro la integración, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, por tratarse de información que puede ser utilizada para afectar la integridad física, salud, e incluso la vida de los militares, así como la seguridad de las instalaciones por estar siendo construido el Tren Maya por la SEDENA, por lo que la información relacionada con dicho Tren es operada por aquella Secretaría, incluyendo los datos ambientales para los cumplimientos que se han ido obteniendo durante la construcción del mismo.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

El derecho a la información no es absoluto, sino que, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, admite excepciones que tengan como fin salvaguardar ciertos bienes constitucionales como lo es la seguridad nacional, para evitar un daño mayor derivado de su difusión. Esto, fundamentándose en diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Constitución Federal; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, la Ley de Seguridad Nacional.

De conformidad con el **trigésimo tercero** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se justifican los siguientes elementos:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;

Artículo 113, fracción I, de la LGTAIP y Décimo noveno Lineamiento

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

párrafo segundo.

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y, por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;

La difusión de tales datos conlleva la pérdida o menoscabo de la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad, frente a actividades criminales encaminadas a atentar en contra de sus misiones generales, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y/o la salud de los militares mismos.

III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;

Al estar en posibilidad de que grupos delincuenciales identifiquen el tipo y cuántas estructuras se autorizaron.

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

La divulgación de la información sujeta a entrega actualiza la probabilidad de que se comprometan los procedimientos preventivos de protección y seguridad, implementados por la SEDENA para resguardar la vida e integridad física de las personas que se localizan en dichas instalaciones, además de tenerse un alto grado de certeza sobre la ubicación física de sus elementos.

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño; y,

El daño ocurriría al saber la ubicación exacta de la disposición de las construcciones autorizadas, en cualquier momento, puesto que como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2017 en el que estableció que los datos, en conjunto y en correlación, permitirían obtener información a los grupos delincuenciales.

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Al respecto, se proporciona **la versión pública** de las Manifestaciones de Impacto Ambiental y sus resoluciones del Tren Maya Tramo 1, 4, 5 norte y sur, 6 y 7. Al respecto podrá conocer la Manifestación de Impacto Ambiental y resolución en su versión pública, que contienen los datos solicitados, al tenor de los siguientes pasos.

[...]

Por lo anterior, dicha **clasificación de reserva** de la información es por

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

un periodo de **5 años**, debido a que dar acceso a la misma podría poner en riesgo la seguridad nacional.

Ahora, por lo que respecta a los demás documentos solicitados, se informa que, las actas SIPOT, no son atribución de esta Unidad Administrativa su generación, o dar trámite alguno al promovente ya que la generación de la misma obedece a la clasificación de datos relacionados con el numeral 113 de la LFTAIP.

Ahora, por lo que se refiere al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, se sugiere remitir su petición al organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, toda vez que de la búsqueda en el Sistema Nacional de Trámites no se localizó un proyecto con la denominación como la refiere el propio solicitante.

En cumplimiento al artículo 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la clasificación antes mencionada fue confirmada por el Comité de Transparencia de esta Secretaría a través de la resolución: **312/2023**. Cabe señalar que la resolución la puede consultar próximamente en la siguiente dirección electrónica: <http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/tacceso.html>.

Por su parte, la Dirección General (sic) Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico (DGGFSOE), le notificó a esta Unidad de Transparencia lo siguiente:

De conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta Dirección General llevó a cabo la búsqueda exhaustiva en sus archivos, así como en el Sistema Nacional de Gestión Forestal respecto de la información de su interés, como resultado, de dicha búsqueda, no se localizó alguna autorización emitida por esta Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico, **relacionada con el Trámite Unificado de cambio de uso de suelo forestal, Modalidad B con riesgo, para el desarrollo de los proyectos denominados Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto (Tulum, Quintana Roo), identificado con el número de proyecto 23QR2022V0050**⁴.

3. **Recurso de revisión.** Inconforme con la respuesta anterior, el solicitante interpuso el recurso de revisión registrado con el número de expediente **RRA 9855/23**, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día quince de agosto de dos mil veintitrés. El solicitante expuso los siguientes argumentos que a continuación se transcriben⁵.

La presente queja se sustenta en la violación al derecho humano que

⁴ Último párrafo de la foja 257 del expediente.

⁵ Véase fojas 259 y 260 del expediente y la transcripción en la propia resolución impugnada.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

prevé el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con el diverso 6 de la Constitución Federal y el ordinal 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, esto en razón de que el sujeto obligado en el presente caso señala que es reservada la información por razones de seguridad nacional, cuestión que infringe y vulnera el derecho humano de ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; lo anterior en razón de que **la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que garantiza que la información en materia del Medio Ambiente es de carácter PÚBLICO.**

La justificación pretendida por el sujeto obligado, en relación a la "Seguridad Nacional" donde expone los contextos de información de ubicación de sitios estratégicos de combustibles y concentración militar, DISTA con bastante notoriedad de los argumentos jurídicos que motiven y den congruencia a la aplicación de la normatividad ambiental en la valoración y análisis de proyecto (información pedida) para advertir si se están atendiendo las condicionantes que protejan y cuiden al medio ambiente en sus distintos elementos de flora, fauna, suelo, subsuelo, contaminación del agua, ríos subterráneos, tala y desmonte de vegetación, contaminantes del aire, el ruido, etc. Situaciones que para nada repercuten a la seguridad nacional y que se antepuso que se solicitaba la Versión Pública, donde prudentemente se puede testar esa información de riesgo a la seguridad, sin embargo, se deja de lado el derecho humano de acceso a la información pública de Seguridad AMBIENTAL, que permita conocer si se están cumpliendo las condicionantes normativas de protección al ecosistema, esto es, si se cumple con la premisa de protección y cuidado al medio ambiente sano.

Se concluye el agravio, reflexionando que: Negar la información bajo consideraciones y factores de "*seguridad nacional*", son argumentos distintos a **lo que realmente se enfoca la información pedida que es el MEDIO AMBIENTE, por lo que resulta contrario a los principios fundamentales de la transparencia y acceso a la información pública, así como la rendición de cuentas**⁶.

4. El recurso fue turnado al Comisionado Ponente Adrián Alcalá Méndez del INAI y el veintidós de agosto de dos mil veintitrés admitió a trámite el recurso y formuló un requerimiento al sujeto obligado mediante el oficio INAI/AAM/SAPA/2S.01/522/2023⁷, de veintinueve de agosto del mismo año, en los términos que se transcriben a continuación.

(...)

⁶ Lo destacado es nuestro.

⁷ Véase oficio en la foja 264.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

I. En relación con la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal, precise y describa en qué consisten las expresiones documentales que dan cuenta del objeto de la solicitud; esto es, la resolución del proyecto denominado "*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, respecto al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo*", así como cada uno de los anexos de dicha resolución. Es decir, cómo está estructurada la resolución solicitada, quién la emitió, a quién va dirigida, qué fecha tiene, cuántos anexos tiene y en qué consisten cada uno de ellos.

II. De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, funde y motive exhaustivamente por qué, específicamente, tal resolución y cada uno de sus anexos, constituyen información protegida por la seguridad nacional. En qué secciones de los documentos pretendidos, se localiza información protegida por la seguridad nacional.

III. En relación con la causal de reserva invocada, formule la prueba de daño en términos de lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, proporcione la resolución del Comité de Transparencia que confirmó la reserva de la información solicitada, asimismo, motive exhaustivamente el plazo de reserva.

IV. En caso de que las documentales aludidas contengan información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Federal, precise qué datos actualizan dichas causales y el fundamento de cada uno de ellos.

(...).

5. El sujeto obligado presentó alegatos mediante escrito de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés⁸, y entre diversos argumentos, señaló que se debía desechar el recurso de revisión porque no tuvo conocimiento de las razones o motivos de la inconformidad del solicitante recurrente y señala también, que, en el caso particular, no opera la suplencia de la queja a favor del solicitante.
6. Refiere como hecho notorio la resolución dictada en el recurso de queja 8/2022-CC derivado de la controversia constitucional 217/2021⁹, en donde la Primera Sala de este Alto Tribunal determinó que era infundado el recurso en contra de **la suspensión que se concedió** en

⁸ Agregado a fojas 281 del expediente. No se deja de advertir que la fecha indicada en el oficio es de ocho de agosto de dos mil veintitrés, cuando el recurso de revisión se admitió hasta el veintidós de agosto del mismo año.

⁹ Resuelto el cinco de julio de dos mil veintitrés por unanimidad de cinco votos.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

contra de los efectos y consecuencias del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

7. Al respecto, sostiene que, en el recurso de queja citado, la Primera Sala resolvió que la declaratoria realizada por el Consejo de Seguridad Nacional mediante el Acuerdo impugnado en la controversia, no realizó una clasificación anticipada, generalizada y definitiva de la información relacionada con el Tren Maya como de interés público y seguridad nacional, basándose en la aplicación o fundamentación del Acuerdo impugnado en la controversia constitucional.
8. Por ello, insiste en que el recurso de revisión planteado por el solicitante debe desecharse, de conformidad con lo previsto en los artículos 155, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP) y 161, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LFTAIP) y confirmar la respuesta del sujeto obligado.
9. Luego, mediante escrito de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la SEMARNAT atendió el requerimiento de información adicional y manifestó, en lo que interesa, lo siguiente¹⁰:

[...]

INFORME

En atención a la fracción I, que para pronta referencia se invoca:

I. En relación con la fracción I del artículo 110 de la Ley Federal, precise y describa en qué consisten las expresiones documentales que dan cuenta del objeto de la solicitud; esto es, la resolución del proyecto denominado "Construcción de

¹⁰ Fojas 268 y siguientes del expediente.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, respecto al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo", así como cada uno de los anexos de dicha resolución. Es decir, cómo está estructurada la resolución solicitada, quién la emitió, a quién va dirigida, qué fecha tiene, cuántos anexos tiene y en qué consisten cada uno de ellos.

El 14 de marzo de 2023 la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) emitió la resolución del proyecto promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Dicho resolutorio consta de 4 apartados: Resultando, Considerando, Términos y Condicionantes y no incluye anexos.

En atención a la fracción II, para mejor proveer se cita:

II. De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, funde y motive exhaustivamente por qué, específicamente, tal resolución y cada uno de sus anexos, constituyen información protegida por la seguridad nacional. En qué secciones de los documentos pretendidos, se localiza información protegida por la seguridad nacional.

La totalidad del documento se encuentra reservada, de conformidad con el Artículo Único del DECRETO por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, publicado el dieciocho de mayo del dos mil veintitrés.

En atención a la fracción III, consistente en:

III. En relación con la causal de reserva invocada, formule la prueba de daño en términos de lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, proporcione la resolución del Comité de Transparencia que confirmó la reserva de la información solicitada, asimismo, motive exhaustivamente el plazo de reserva.

Con motivo de la solicitud **330026723002141**, se solicitó la confirmación al Comité de Transparencia de la SEMARNAT, de la reserva por seguridad nacional, en los siguientes términos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, 103 y 106, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); los diversos 97, 98, fracción I y 100 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); el vigésimo quinto de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública; el séptimo, fracción I y párrafo último, y octavo párrafo, primero al tercero, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, le informo que el pasado veintiocho de abril, ocho, diez, veintitrés y veintiséis de mayo del presente año, respectivamente, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

(DGIRA) recibió las siguientes solicitudes de información con folios 330026723001788, 330026723001794, 330026723001869, 230026723001959, 330026723002187 y 330026723002141.

[...]¹¹

Al respecto, la información relacionada con el proyecto Tren Maya se considera clasificada como **reservada por seguridad nacional**; por lo cual, la DGIRA la somete a aprobación del Comité de Transparencia de la SEMARNAT, conforme al cuadro que se describe a continuación:

[...]

De ahí que el Gobierno de México entiende la seguridad nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, a fin de construir una paz duradera y fructífera.

Asimismo, el Eje General III Economía de dicho plan, se señala que el **Tren Maya** es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán... El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península del Estado de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los

¹¹ Se omite la transcripción de los siguientes párrafos del informe rendido por el sujeto obligado, porque se refiere a cada una de las diversas solicitudes identificadas con los folios indicados, y que, aunque se trata de aspectos relacionados con la construcción del Tren Maya, **no es la materia de la solicitud que origina este recurso**. La información solicitada en esos folios tiene que ver con: **1)** los estudios Geohidrológico solicitados a FONATUR para el Tren Maya; **2)** permisos para modificación de obras en el Estado de Campeche; **3)** estudios de capacidad de carga turística en uno de los tramos del Tren Maya; **4)** el proyecto arquitectónico y la Manifestación de Impacto Ambiental del hotel que la SEDENA o Tren Maya S.A. de C.V., están construyendo en el municipio de Calakmul, a 10 km. de la zona arqueológica; **5)** información sobre la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en específico, -Cualquier documento relacionado con el impacto ambiental en los procesos listados y relacionados con las obras identificadas; incluidas las manifestaciones de impacto ambiental; y **6)** si existe el documento llamado "*Programa de Vigilancia Ambiental*" del Tren Maya Tramo 7, así como la obligación de elaborar, actualizar y presentar este Programa, en el plazo de tres meses posteriores a la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental.

propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas, y que uno de los ejes del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo de Tehuantepec para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, por medio del uso combinado de diversos **medios de transporte;**

[...]

Ahora bien, de lo establecido por aquellos instrumentos se puede inferir que, para la preservación de la seguridad nacional, es necesario contar con infraestructura y que la construcción del Tren Maya se está realizando por la SEDENA, esto es infraestructura y operación de la misma toda vez que con el proyecto global del Tren Maya éste incluye particularidades en materia de defensa nacional.

En ese sentido, es que esta unidad se hizo conocedora de las particularidades, así como del Plan de Seguridad del Tren Maya: [...]

Ahora, cabe destacar la publicación de la norma a posteriori y específica, esto es el Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, publicado el dieciocho de mayo del dos mil veintitrés, se desprenden los siguientes elementos que se deben considerar conforme para confirmar su clasificación:

Ya que el artículo 26 de la CPEUM prevé que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación.

Así mismo el artículo 28 de la CPEUM señala expresamente que [...] los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del numeral 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación ... como lo es el Tren Maya.

Así mismo, el "*Decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024*", publicado en el DOF el 4 de agosto de 2020, prevé, entre otros objetivos prioritarios, el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec, el impulso de un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de la población ubicada en la región, y acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema.

Así, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, su plataforma

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

logística y demás infraestructura, por su ubicación geográfica entre los estados de Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave, Tabasco y Chiapas, son estratégicas debido a su localización, que permite comunicar el océano Pacífico con el golfo de México y el océano Atlántico, ya que la mercancía que ingresa por los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, puede ser transportada directamente hasta Puerto Chiapas y a Ciudad Hidalgo, Chiapas, incluso a Ciudad de Tecún Umán, Guatemala, y viceversa, que impulsa el flujo de mercancías, no solo en la región istmeña, sino además hacia América Central, a través de las líneas "K" y "KA"; además de que se requiere extremo cuidado y vigilancia en el transporte de sustancias peligrosas que se lleva a cabo en dicho corredor.

Por otra parte, los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, por su ubicación geográfica, resultan estratégicos para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo cual permite la detección e intercepción oportunas de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la seguridad nacional y la integridad territorial del país; además, territorial y operativamente son complementarios del funcionamiento y operación del Tren Maya.

Por su ubicación geográfica y su colindancia, que garantizan la conectividad entre el océano Pacífico, el Golfo de México y la zona fronteriza con Guatemala y Belice, porque son complementarias para mantener la seguridad interna del país y, desde luego, la seguridad nacional, y por la naturaleza de sus instalaciones, es procedente reconocer el carácter de estratégicas y prioritarias, y por tanto de interés público y de seguridad nacional, las instalaciones del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.

Que, en términos del artículo 13, fracciones I, VI y X, de la Ley de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional tiene como finalidad establecer y articular la política en esa materia, por lo que le corresponde la integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar las medidas necesarias para la seguridad nacional, así como de las demás que establezcan otras disposiciones o el Presidente de la República.

Por lo antes señalado, el Consejo de Seguridad Nacional, mediante acuerdos de las sesiones ordinarias de 11 de julio de 2022 y 3 de mayo de 2023, declaró como de seguridad nacional e interés público el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, respectivamente, en razón de los objetivos que persiguen, de su ubicación estratégica en el territorio nacional y de la naturaleza de la prestación de sus servicios. Por tanto, la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

equipo, tanto del Tren Maya, cuya ruta comprende los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya área de influencia incluye los Estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz de Ignacio de la Llave y Tabasco, y va desde Puerto Chiapas a Salina Cruz, Coatzacoalcos y Dos Bocas, e incluye las líneas ferroviarias "K", "Z", ramal "ZA", "FA" y ramal Dos Bocas a Roberto Ayala, así como los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, son también de seguridad nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la LGTAIP se justifican los siguientes elementos de prueba de daño:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;

Daño real: En razón de que la información relativa a las estructuras y operaciones autorizadas dan cuenta de la construcción por parte de SEDENA del Tren Maya, hecho notorio, dicha información de ser divulgada podría ser aprovechada para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional (Secretaría de la Defensa Nacional); sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignan.

Daño demostrable: 1. Delincuencia organizada que impide la realización correcta de las actividades de SEDENA, la SEMAR, la Policía Federal, FGR, etc., véase también <https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-04-21/mexico-carteles-atacan-con-drones-cargados-de-explosivos> <https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/24/violencia-en-aquililla-atacaron-de-nuevo-el-cuartel-militar-y-quemaron-las-puertas-con-gasolina/>

Daño identificable: Aprovechamiento de información de material de instalaciones y su disposición específica en el predio, así como materiales de construcción de las instalaciones de la SEDENA.

I. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda;

Pone en peligro la integración, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, por tratarse de información que puede ser utilizada para afectar la integridad física, salud, e incluso la vida de los militares, así como la afectación al desarrollo de las actividades de inteligencia, contrainteligencia y actuación contra la delincuencia organizada, necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como la seguridad de las instalaciones.

II. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio,

El derecho a la información no es absoluto, sino que, atendiendo a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, admite excepciones que tengan como fin salvaguardar ciertos bienes constitucionales como lo es la seguridad nacional, para evitar un daño mayor derivado de su

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

difusión. Esto, fundamentándose en diversos artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Constitución Federal; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, la Ley de Seguridad Nacional.

De conformidad con el **trigésimo tercero** de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, se justifican los siguientes elementos:

I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada: 113, fracción I, de la LGTAIP y Décimo noveno Lineamiento párrafo segundo;

II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y, por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;

La difusión de tales datos conlleva la pérdida o menoscabo de la capacidad de respuesta de los elementos de seguridad, frente a actividades criminales encaminadas a atentar en contra de sus misiones generales, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y/o la salud de los militares mismos.

III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;

Al estar en posibilidad de que grupos delincuenciales identifiquen el tipo y cuántas estructuras se autorizaron.

IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;

La divulgación de la información sujeta a entrega actualiza la probabilidad de que se comprometan los procedimientos preventivos de protección y seguridad, implementados por la SEDENA para resguardar la vida e integridad física de las personas que se localizan en dichas instalaciones, además de tenerse un alto grado de certeza sobre la ubicación física de sus elementos.

V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño; y,

El daño ocurriría al saber la ubicación exacta de la disposición de las construcciones autorizadas, en cualquier momento, puesto que como lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional 1/2017 en el que

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

estableció que los datos, en conjunto y en correlación, permitirían obtener información a los grupos delincuenciales.

VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

Por lo anterior, se sometió a consideración del Comité de Transparencia de la SEMARNAT la confirmación de dicha **clasificación de reserva** de la información por un periodo de **5 años**, debido a que dar acceso a la misma podría poner en riesgo la seguridad nacional. La cual fue confirmada con número de resolución 312/2023.

En atención a la fracción IV:

IV. En caso de que las documentales aludidas contengan información confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Federal, precise qué datos actualizan dichas causales y el fundamento de cada uno de ellos.

DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.	MOTIVO Y DATOS PERSONALES QUE SE CLASIFICAN COMO CONFIDENCIAL.	FUNDAMENTO LEGAL.
1. Oficio requerido.	Contienen datos personales de personas físicas identificadas o identificables, diversas al promovente, consistente en: Correo electrónico Teléfono.	Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículos 106 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lineamientos trigésimo octavo, cuadragésimo y cuadragésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones Públicas.

[...]

10. Una vez que substanció el procedimiento, el INAI dictó la resolución definitiva en el recurso de revisión **9855/23** el tres de octubre de dos mil veintitrés y **modificó** la respuesta de la SEMARNAT, para el efecto de que entregara al solicitante la versión pública de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en las que únicamente deberá proteger la información que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto,

específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del combustible y total de operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (pagina 107), por seguridad nacional, en términos del artículo 110, fracción I, de la LFTAIP.

11. En ese sentido, el INAI al dictar la resolución impugnada, específicamente, en el considerando segundo, analizó las causales de improcedencia y de sobreseimiento y las desestimó. Al respecto, sostiene que el solicitante aduce que se le negó la información solicitada y advierte que está impugnada la reserva invocada por el sujeto obligado y, por ello, el desechamiento del recurso es improcedente.
12. Luego, el Instituto precisa que el solicitante requirió la resolución y anexos del proyecto denominado “*Construcción de una Base Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, respecto del trámite de unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo número 23QR2022V0050, referente a la autorización de impacto ambiental correspondiente. Así como, las opiniones e informes que fueron aportados en el procedimiento en cuestión¹².
13. El Instituto en relación con la solicitud indicó que el sujeto obligado realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales con los que cuenta y advirtió que la información relacionada con el proyecto señalado se considera clasificada como reservada por seguridad nacional, en términos de lo previsto por el artículo 110, fracción I, de la

¹² Véase en el apartado denominado Descripción del caso.

LFTAIP.

14. Así, el INAI concluyó que la resolución tiene como finalidad la de verificar la procedencia o no de la reserva de la información en términos del artículo 148, fracción I, en relación con el diverso 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
15. Antes de realizar el estudio correspondiente el Instituto resaltó los siguientes hechos:
 - Existe en la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud con número de folio 330026723002324 y la materia de la petición es exactamente la misma que la identificada con el folio 330026723002457, de este asunto.
 - La respuesta del sujeto obligado en ambas solicitudes es en el mismo sentido; esto es, la clasificó como reservada por razones de seguridad nacional.
 - De las dos solicitudes de información derivaron, respectivamente, los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes. En relación con la solicitud **330026723002324** derivó el recurso de revisión número **RRA 8809/2023** y en la sustanciación de dicho medio de impugnación se realizó una diligencia de acceso a la información clasificada¹³.
 - Con base en la información que obtuvo el INAI en esa diligencia de acceso a la información, es que invocó el acta como hecho notorio al resolver el **RRA 9855/2023** del cual deriva el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
16. Posteriormente, el Instituto refirió que en atención al motivo de la

¹³ La resolución dictada en este recurso, esto es, en el RRA 8809/2023 es materia de revisión en el diverso RRMSN 4/2023 turnado a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

materia de la solicitud, al requerimiento de información adicional y, a lo expuesto en vía de alegatos, advirtió que el sujeto obligado informó que el catorce de marzo de dos mil veintitrés, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental **emitió** la resolución del proyecto promovido por la Secretaría de la Defensa Nacional, para el cambio de uso de suelo forestal modalidad B, en el proyecto identificado con la clave 23QR2022V0050; y que esa documental se encontraba **reservada** en términos del Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público, publicado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

17. Para facilitar el estudio del presente asunto cabe destacar que, una vez realizada la anterior precisión, el INAI dictó la misma resolución que en el diverso recurso **RRA 8809/2023** que fue materia de análisis en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional **4/2023**.
18. En ese sentido, el Instituto explicó que del portal oficial del sujeto obligado localizó información sobre el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, identificado como trámite SEMARNAT 09-001-B y, detalló de qué se trataba el trámite, cuáles son los documentos que se debían presentar, entre ellos, un estudio de riesgo ambiental, siempre y cuando las obras que se vayan a someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental involucraran actividades altamente riesgosas; y precisó lo que se debía realizar cuando se trataba de obtener en un procedimiento administrativo, el trámite relativo a la autorización en materia de impacto ambiental para

las obras y actividades señaladas en la fracción VII del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA).

19. Al respecto, también tomó en cuenta que al concluir la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, el sujeto obligado deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada.
20. En ese orden de ideas, el INAI considera cuál es el interés del solicitante y señala que advierte, que el procedimiento realizado por la SEMARNAT debe establecer parámetros mínimos que garanticen la supervivencia de la biodiversidad de los ecosistemas y suelos en los que se pretende realizar el proyecto.
21. Al respecto, advirtió que la materia de la solicitud es referente a la Construcción de una Base Aérea Civil Militar y el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto y que el sujeto obligado clasificó la información con base en el Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos, son de seguridad nacional y de interés público, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción I, de la LFTAIP.
22. Así, con base en el decreto señalado el Gobierno Federal declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas con la infraestructura de diversos sectores tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, Chetumal y de Tulum, Quintana Roo.
23. Sin embargo, el INAI sostuvo que el decreto con base en el cual se

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

reservó la información se trata de un acto jurídico que denota la intención de clasificar de manera general toda la información relacionada con ese tipo de obras; y, ello contradice lo previsto por el artículo 6 constitucional, el cual prevé un régimen excepcional para que de manera casuística se analicen los supuestos en los que se pueda actualizar algún supuesto de clasificación.

24. En relación con la prueba de daño que realizó el sujeto obligado dijo el Instituto, que no dejaba de advertir que la había realizado, pero, no justificó las razones por las que concluyó que revelar la totalidad de la resolución puede atentar en contra de la seguridad nacional.
25. Finalmente, invocó las consideraciones de la controversia constitucional 217/2021, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se invalidó el *“Acuerdo por el que se instruye a dependencias y entidades administrativas de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”*, publicado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Las razones que fueron sostenidas para declarar la invalidez de dicho Acuerdo, son las siguientes:
 - Realiza una clasificación de la información anticipada y con ello se vulnera la competencia del INAI, al declarar de interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura a que se refiere el decreto.
 - La categorización anticipada de seguridad nacional que el Acuerdo atribuye a los proyectos de infraestructura, así como las que se consideren prioritarias o estratégicas, transgrede el artículo 134 de la Constitución Federal, dado que establece una

excepción normada al régimen de licitaciones públicos y, con ello, se vulnera el derecho de acceso a la información pública.

- El Ejecutivo Federal no cuenta con la facultad para dotar de contenido a los conceptos de seguridad nacional, interés público y áreas estratégicas y prioritarias.

26. En consecuencia, concluyó que no es procedente clasificar en su totalidad la resolución del proyecto para el cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, identificado con clave 23QR2022V0050, con fundamento en el *“Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como de los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”*, dado que existe una prohibición de emitir acuerdos que clasifiquen documentos o información reservada, de forma anticipada general y en cada caso deberá determinarse mediante la aplicación de una prueba de daño.
27. Por último, el INAI tomó en cuenta como hecho notorio, que tuvo a la vista la versión íntegra de la resolución que corresponde al proyecto denominado *“Construcción de una Base Aérea Civil Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”*, con motivo del análisis del documento técnico unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, regional, que incluye el Estudio de Riesgo Ambiental, de catorce de marzo de dos mil veintitrés y una vez que advirtió su contenido y los apartados correspondientes, concluyó lo siguiente:

[...]

Por consiguiente, **este Instituto considera que resulta procedente clasificar únicamente las características técnicas y específicas de**

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

las instalaciones del aeropuerto, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en tanto que con su divulgación podría destruirse o inhabilitarse la infraestructura estratégica para la provisión de bienes y servicios como lo son las vías generales de comunicación.

Al respecto, en cumplimiento al numeral 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera que se justifica la reserva de esta información en atención a la siguiente prueba de daño:

- **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional.** Si bien la infraestructura aeroportuaria se considera una vía general de comunicación y una zona estratégica para el Estado dar a conocer características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto podría producir un daño presente, real e identificable, ya que permitiría obtener información respecto del área delimitada del recinto aeroportuario, como son las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones.

Lo anterior es así, pues se considera estratégica para proteger la estabilidad de las instalaciones e infraestructura de los aeropuertos, la cual es de carácter indispensable para la provisión de bienes y servicios como vía general de comunicación, ocasionando un daño probable, dado que, con el conocimiento específico de las limitaciones de tales áreas. Podría destruirse o inhabilitarse la infraestructura estratégica, vías generales de comunicación aérea, y un daño específico, en tanto que, con dicha inhabilitación o destrucción de las áreas del recinto especificadas en los documentos en mención, sea afectada la provisión de bienes o servicios de dicha vía general de comunicación.

- **El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.** La divulgación de la información en comento, se traduce en un riesgo de perjuicio dado que son las vías generales de comunicación aérea, es decir, la hipostasis (sic) que se encuentra prevista como de orden público en los términos del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, y cuyo interés público general supera el interés particular de la persona solicitante por requerir la información que se califica de reservada, máxime si dicho precepto señale que la zona de protección es parte de la vía de comunicación aérea y se integra por los espacios aéreos destinados para las trayectorias de llegada y salida, y la delimitación de obstáculos, misma que se reflejan en el plano (sic) de la poligonal.
- **La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.** Se considera que la reserva de información es el medio

menos restrictivo posible ya que el derecho de acceso a la información del particular solo es superado por el interés general de mantener a salvo la seguridad de la infraestructura, máxime si ella representa un reciento (sic) estratégico para la provisión de bienes y servicios.

En virtud de lo anterior, **este Instituto considera que se acredita la clasificación como reservada, con fundamento en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal, únicamente por lo que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (página 107).**

Ahora bien, en relación con el periodo de reserva, el párrafo segundo del artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, disponen que la información clasificada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años.

Por consiguiente, se considera pertinente reservar la información, por el plazo de **cinco años**; lo anterior, considerando que su publicidad puede potenciar y generar un ataque o vulneración a la seguridad nacional, así como la comisión de diversos delitos. Lo anterior, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así, el sujeto obligado debió proporcionar una versión pública del documento requerido por la persona recurrente, acompañado de la correspondiente acta del Comité de Transparencia en la que, de manera fundada y motivada se confirme la clasificación de aquella información que tiene el carácter de reservada por seguridad nacional, siguiendo el procedimiento del artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Consecuentemente, este Instituto considera que el agravio de la persona recurrente contra la clasificación de información fue **parcialmente fundado**.

Por ello, es procedente **MODIFICAR** la respuesta proporcionada por el sujeto obligado de que (sic) efecto de que realice lo siguiente:

- Proporcione a la persona solicitante **la versión pública** de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en las **que únicamente** deberá **proteger la información que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto**, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (página 107), por seguridad nacional, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Emita a través de su Comité de Transparencia el acta debidamente fundada y motivada donde se confirme la versión pública del documento solicitado, en los términos antes expuestos, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 140 de la Ley en la materia, y entregue a la persona solicitante el acta correspondiente.

Ahora bien, toda vez que la modalidad elegida por la persona recurrente fue en medios electrónicos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; el sujeto obligado deberá entregar la referida información, a través de dicho medio.

Lo anterior, deberá hacerlo del conocimiento de la persona recurrente, a través del medio señalado en el recurso de revisión para efecto de recibir notificaciones.

En ese sentido, el Pleno de este Instituto:

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos expuestos en el Considerando Cuarto de la presente resolución, y conforme a lo establecido en el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado en un plazo no mayor de **10 días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente resolución, [...]

28. **Recurso de revisión en materia de seguridad nacional.** Mediante escrito recibido en el buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal María Estela Ríos González, interpuso recurso de revisión en materia de seguridad nacional en contra de la resolución del INAI, dictada en el recurso de revisión **RRA 9855/23**, derivado de la solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 330026723002457.
29. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal expuso diversos agravios en contra de la resolución del INAI, los cuales serán sintetizados y

analizados en el apartado del estudio de fondo de esta sentencia.

30. **Turno.** Por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo, lo admitió, concedió la suspensión de la resolución recurrida, tuvo por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas como pruebas por la recurrente, ordenó dar vista al Instituto y a los terceros interesados y, turnó el expediente al **Ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea**, como asunto relacionado con el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 4/2023.
31. Lo anterior, porque desde el auto de admisión advirtió que ambos recursos, derivaban de solicitudes de información relacionadas con la resolución de trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado *“Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”*, bajo resguardo de la SEMARNAT.
32. **Retorno.** Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Pleno de este Máximo Tribunal en sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre del mismo año, en el sentido de returnar los asuntos radicados en Pleno asignados al **Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea**, se returnó este asunto al **Ministro Alberto Pérez Dayán**.
33. En proveído de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro se pusieron los autos a disposición del **Ministro Alberto Pérez Dayán** para la elaboración del proyecto respectivo.

C O N S I D E R A N D O:

I. C O M P E T E N C I A.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

34. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso, en términos de lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 157, párrafo segundo, 189 a 193 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP); y 10, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Punto Segundo, fracción XVII, del Acuerdo General 1/2023 emitido por este Pleno, al tratarse de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, interpuesto por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de una resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

II. PROCEDENCIA.

35. El recurso de revisión en materia de seguridad nacional es procedente, en términos de los artículos 6, Apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 189, párrafo primero, así como en el diverso 190 de la LGTAIP, toda vez que fue presentado por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, quien considera que la resolución emitida por el INAI pone en riesgo la seguridad nacional.

III. LEGITIMACIÓN.

36. En términos de los artículos 6, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 189 y 190 de la LGTAIP, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tiene legitimación para interponer el recurso de revisión en materia de

seguridad nacional.

37. Lo anterior, en virtud de que el escrito fue suscrito por María Estela Ríos González, quien se ostentó como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal y acreditó su personalidad mediante la exhibición de la copia certificada de su nombramiento¹⁴, expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. OPORTUNIDAD.

38. En términos del párrafo segundo del artículo 189 de la LGTAIP¹⁵, el recurso debe interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado.
39. La resolución recurrida se notificó al sujeto obligado el cinco de octubre de dos mil veintitrés, como se advierte del acuse de recibo de notificación que obra en las constancias remitidas por el Instituto¹⁶. De este modo, el plazo transcurrió del viernes seis al martes diecisiete de octubre del mismo año, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 126 de la LGTAIP¹⁷. En ese sentido, si el recurso se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el

¹⁴ Agregada a foja 15 del expediente.

¹⁵ **Artículo 189.** El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. **El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo garante notifique la resolución al sujeto obligado.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia.

¹⁶ Véase foja 189.

¹⁷ **Artículo 126.** Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán como hábiles.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

lunes dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, es indudable que se promovió de manera oportuna¹⁸.

V. MATERIA DEL RECURSO DE REVISIÓN.

40. Ahora bien, para la resolución de este asunto es necesario precisar cuál es la información que el INAI instruyó entregar al particular y respecto de la cual, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, afirma que se pondría en riesgo la seguridad nacional del Estado Mexicano.
41. Es pertinente señalar que, en la solicitud de información formulada por el particular a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, e identificada con el número de folio **330026723002457**, requirió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo siguiente¹⁹:

LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE AÉREA MILITAR Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE CARRILLO PUERTO (TULUM, Q. ROO) QUINTANA ROO” RESPECTO A UN TRAMITE DE (sic) “UNIFICADO DE CAMBIO DE USO DE SUELO FORESTAL, MODALIDAD B, CON RIESGO” (23QR2022V0050).

- SE PIDE LA INFORMACIÓN EN LA VERSIÓN PÚBLICA DE LA RESOLUCIÓN, ASÍ COMO LOS ANEXOS O DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE SE RELACIONE CON TAL AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
- SE PIDE LAS OPINIONES Y/O INFORMES QUE SE HAYAN APORTADO PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EN CUESTIÓN, EN SU VERSIÓN PÚBLICA.

42. Por su parte, el INAI en la resolución recurrida **modificó** la respuesta del sujeto obligado y decidió que se debía entregar al solicitante la información en los términos siguientes²⁰:

[...]

¹⁸ Es inhábil el día doce de octubre de dos mil veintitrés.

¹⁹ Como se advierte de la copia de solicitud agregada a foja 241.

²⁰ Véase la transcripción del recurso de revisión en la resolución del INAI, específicamente en la página 65.

Por ello, es procedente **MODIFICAR** la respuesta proporcionada por el sujeto obligado de que efecto (sic) de que realice lo siguiente:
Proporcione a la persona solicitante **la versión pública** de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en las que **únicamente deberá proteger** la información que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (página 107), **por seguridad nacional**, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
[...]

43. En relación con lo anterior, cabe recordar que el propio particular al interponer su recurso de revisión ante el INAI manifestó que²¹, lo que interesa de la solicitud, es conocer la información relacionada con el medio ambiente y que le permita saber si se están cumpliendo con las condicionantes normativas de protección al ecosistema, esto es, si se cumple con la premisa de protección y cuidado al medio ambiente.
44. En ese sentido, el solicitante insistió en que negar la información bajo consideraciones y factores de seguridad nacional, son argumentos que no tienen nada que ver con lo que realmente es la información solicitada, la cual, está relacionada con el medio ambiente. De ahí, que resulta contrario a los principios fundamentales de la transparencia y acceso a la información pública y de la rendición de cuentas.
45. Ahora bien, de lo anteriormente narrado, está demostrado que la materia de la revisión en este asunto es determinar si la resolución recaída al proyecto identificado con número 23QR2022V0050, trámite que corresponde a la unificación de cambio de uso de suelo forestal,

²¹ Véase transcripción del recurso de revisión en la resolución del INAI, específicamente, la página 16.

modalidad B, con riesgo, del proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en su versión pública, efectivamente puede afectar la seguridad nacional.

46. Lo anterior, en virtud de que el INAI **instruyó la entrega de la versión pública** de dicho proyecto, reservando la diversa información que consideró clasificada por seguridad nacional, tal y como desde el principio lo requirió el solicitante.
47. En ese sentido, cabe reiterar que **no es materia de la revisión** en este asunto, la información que, aunque está contenida en la resolución del proyecto denominado “*Construcción de una Base Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, tiene que ver con las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones, el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero.

VI. ASPECTO PRELIMINAR.

48. Una vez que ha quedado establecido lo que es materia de revisión por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario referirse a la naturaleza y alcance del recurso de revisión en materia de seguridad nacional, así como al marco normativo aplicable a esta institución y al derecho de acceso a la información.

A. Naturaleza y alcance del recurso de revisión en materia de

seguridad nacional.

49. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los diversos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1/2015²², 1/2016²³, 1/2017²⁴, 2/2017²⁵, 3/2021²⁶ y 6/2021²⁷, delimitó la naturaleza y alcance del presente recurso.

²² Resuelto en sesión de tres de abril de dos mil diecisiete, bajo la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales (Presidente). Ausentes los Ministros Franco González Salas y Pardo Rebolledo.

²³ Resuelto en sesión de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, por mayoría de diez votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea por razones adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales (Presidente), respecto del apartado VII, relativo a las consideraciones y fundamentos. Voto en contra de la Ministra Luna Ramos.

²⁴ Resuelto en sesión de diez de mayo de dos mil dieciocho bajo la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por una mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz con salvedades, Luna Ramos apartándose de consideraciones, Franco González Salas apartándose parcialmente de consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Aguilar Morales (Presidente), respecto del considerando quinto, relativo a los alcances del estudio. Voto en contra del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

²⁵ Fallado en sesión de treinta de octubre de dos mil diecisiete bajo la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, por mayoría de seis votos de los señores Ministros Luna Ramos, apartándose de consideraciones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández apartándose de consideraciones, Medina Mora I., Pérez Dayán y Aguilar Morales (Presidente), respecto del apartado VII, relativo al estudio. Votaron en contra los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea y Laynez Potisek.

²⁶ Resuelto en sesión de dieciséis de mayo de dos mil veintidós bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales con precisiones, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando sexto, relativo al aspecto preliminar. Voto en contra del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea (Presidente).

²⁷ Resuelto el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por mayoría de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del considerando sexto, relativo al aspecto preliminar. Voto en contra del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea (Presidente).

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

50. Al respecto, precisó que de acuerdo con los artículos 6, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones del Instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin embargo, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional, únicamente la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá interponer el recurso de revisión en materia de seguridad nacional.
51. Asimismo, se indicó que, a la luz de los preceptos normativos antes citados, se advierte que el recurso de revisión en materia de seguridad nacional constituye un medio de defensa legal extraordinario o de carácter excepcional²⁸.
52. Lo anterior es así porque, tratándose de los sujetos obligados, tanto la Constitución, como la legislación de la materia establecieron como principio general el carácter vinculatorio, definitivo e inatacable de las resoluciones del INAI, lo que da cuenta de una de las características institucionales atribuidas desde la Norma Fundamental al citado Instituto, en su carácter de órgano constitucional autónomo; característica que incide en su estructura orgánica y que busca garantizar su autonomía e independencia funcional, con el objetivo de que sean efectivamente alcanzados los fines encomendados al órgano garante del acceso a la información, el que por su especialización e importancia social requiere de tener asegurada su autonomía respecto

²⁸ Véase el “DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA”, relativo a la reforma constitucional de los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 110, 110, 111, 116 y 122, en materia de transparencia, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil doce, fojas 34 y 35.

de los poderes del Estado.

53. Al respecto, resultan ilustrativas las jurisprudencias P./J. 12/2008 de rubro "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS"²⁹ y P./J. 20/2007 de rubro "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS"³⁰.
54. De esa forma, y para efectos de sus resoluciones, se precisó que el INAI no está subordinado a autoridad alguna, adopta sus decisiones con plena independencia y los sujetos obligados deben dar cumplimiento incondicional a sus determinaciones; lo anterior, sin perjuicio de que a los particulares asista el derecho de impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación³¹.
55. En relación con lo anterior, resultan aplicables las tesis de rubros: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DONDE FIGURE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HUBIERE EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES"³² e "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES"³³.
56. Con base en lo expuesto este Tribunal Pleno concluye que por la

²⁹ Jurisprudencia P./J. 12/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 2008, Tomo XXVII, página 1871, registro 170238.

³⁰ Jurisprudencia P./J. 20/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2007, Tomo XXV, página 1647, registro digital 172456.

³¹ Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el diverso 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

³² Jurisprudencia 2a./J. 166/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 16, enero de 2013, Tomo II, página 1101, registro digital 2002546.

³³ Tesis 1a. XIV/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 657, registro digital 2000235.

naturaleza del recurso de revisión en materia de seguridad nacional deben examinarse todas las consideraciones, ya sean de carácter sustantivo o adjetivo que tengan como resultado la divulgación de cierta información que, a juicio de las autoridades responsables o sujetos obligados pueda poner en peligro la seguridad nacional, dado que se trata de una cuestión de orden público y no se debe limitar ese estudio a los agravios expuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; cuestión que será resuelta de manera definitiva y con plena jurisdicción por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

57. A partir de estos alcances que han sido interpretados por este Tribunal Pleno, tanto a nivel constitucional como legal, al recurso de revisión en materia de seguridad nacional y habiendo analizado tanto la resolución impugnada, como el conjunto de manifestaciones y alegatos del recurrente, es que este Alto Tribunal se ocupará de examinar: la determinación del Instituto consistente en modificar la respuesta de la SEMARNAT, en el sentido de que entregue la versión pública de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado *“Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”* a la persona solicitante.

B. Marco normativo en materia de seguridad nacional y el derecho de acceso a la información.

58. Antes de analizar el fondo del asunto, en este apartado se establecerá el marco normativo que rige esta materia, para que, con base en ello, se analice la resolución del INAI, a partir de lo que determinó que se debía entregar de la información solicitada por el particular.

59. Al resolver los recursos de revisión en materia de seguridad nacional citados en el apartado anterior, el Tribunal Pleno formuló algunas consideraciones sobre el derecho a la información, las cuales resultan relevantes para resolver este asunto. En esas sentencias se tomaron en cuenta los criterios judiciales en los que se ha analizado este derecho y en los que se establecieron las siguientes consideraciones³⁴.
60. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el derecho a la información constituye un elemento esencial en la estructura del Estado constitucional democrático de derecho.
61. Lo anterior es así, porque el derecho a ser informado implica una obligación positiva a cargo del Estado, consistente en comunicar a la sociedad respecto de aquellas cuestiones que puedan incidir en su vida o en el ejercicio de sus derechos, sin que sea necesaria alguna solicitud o requerimiento por los particulares. Esto no significa que el Estado y sus instituciones deban difundir toda la información que posean, ya que la actualización de esta obligación requiere la necesaria existencia de un interés que justifique publicar de oficio cierta información.
62. Por tanto, el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de

³⁴ En dichas sentencias a su vez, se tomaron en cuenta los criterios judiciales en los que se ha analizado este derecho:

La jurisprudencia P./J. 15/2015, de rubro RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DE UN JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGUEN A LAS PARTES EL ACCESO A INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA POR LA AUTORIDAD, O BIEN, QUE REQUIERAN A ÉSTA SU EXHIBICIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO [ARTÍCULOS 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE Y 95, FRACCIÓN VI, DE LA ABROGADA". Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, página 43, Registro 2009177.

La tesis aislada 2a. LXXXVIII/2010, de rubro INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO". Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 463, Registro 164032.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

oficio sólo aquella información relacionada con asuntos de relevancia o interés público, que pueda trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas y que sea necesaria para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva.

En todo caso, debe considerarse, conforme con el principio de buena fe en materia de acceso a la información, que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública.

63. En ese sentido, el Estado deberá respetar los principios de máxima publicidad y disponibilidad de información, por lo que debe garantizar el derecho a la información de manera amplia, de tal forma que esta exigencia debe cumplirse no sólo respecto de su difusión, sino también de su recepción, incluyendo tanto la información que es producida o se encuentra en posesión de los órganos de gobierno, como la que es propia de los particulares.
64. Debe advertirse, en todo caso, que el derecho a la información no es absoluto, sino que admite excepcionalmente restricciones que deberán atender a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de salvaguardar otros bienes constitucionalmente tutelados, como lo son la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral o bien, cuando tal información, de ser publicada, pueda alterar, afectar o trascender a la vida o al ejercicio de los derechos de las personas.
65. Se trata, en todos los casos, de fines constitucionalmente válidos que, desde la perspectiva de tutela a los intereses públicos y privados, permiten establecer limitaciones al derecho a la información, privilegiando la protección de ésta con el objetivo de evitar un daño mayor derivado de su difusión.
66. En relación con lo anterior y tomando en cuenta lo establecido por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos³⁵, y por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁶, se debe analizar si la información que está en posesión del sujeto obligado constituye información pública y, por ende, es susceptible de divulgarse, es decir, las excepciones deben ser interpretadas restrictivamente y de tal forma que se favorezca el derecho de acceso a la información, se satisfaga un objetivo legítimo, siempre y cuando dichas restricciones sean necesarias para satisfacer un interés público imperativo³⁷.

67. Por ello, si la información constituye un dato personal o sensible, inherente a lo privado, se deberá analizar si se ubica en alguna de las categorías de reservada o confidencial y, por ende, está protegida de su divulgación de manera permanente.
68. De ahí que este Alto Tribunal haya establecido que los alcances del principio de máxima publicidad en relación con el derecho de acceso a la información se orientan en tres ejes: (I) El derecho a la información está sometido a un régimen limitado de excepciones; (II) La reserva de información por parte de las autoridades deberá responder a una justificación realizada mediante una prueba de daño; y, (III) El principio de máxima publicidad es la herramienta para interpretar las disposiciones legales relacionadas con el derecho de acceso a la

³⁵ Caso de Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola y Arturo Longton Guerrero vs Chile. Sentencia del 19 de septiembre de 2006.

³⁶ Contradicción de Tesis 56/2011, resuelta por el Tribunal Pleno en sesión del treinta de mayo de dos mil trece, bajo la ponencia del Ministro Sergio A. Valls Hernández, por una mayoría de siete votos de las señoras Ministras Luna Ramos y Sánchez Cordero de García Villegas y de los Ministros Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Valls Hernández y Pérez Dayán. Con voto en contra de Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Aguilar Morales y Presidente Silva Meza.

³⁷ Amparo en revisión 699/2011, fallado por el Tribunal Pleno en sesión de diez de julio de dos mil doce, por el encargado del engrose Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por mayoría de ocho votos de los Ministros Aguirre Anguiano por consideraciones distintas, Franco González Salas con salvedades, Zaldívar Lelo de Larrea en contra de las consideraciones y por la interpretación conforme del precepto impugnado que dé lugar a conceder el amparo por vicios de legalidad, Pardo Rebolledo con salvedades, Aguilar Morales con salvedades, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y Ortiz Mayagoitia con salvedades.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

información³⁸.

69. Ahora bien, con relación a las materias o supuestos en los que resultan válidas las restricciones, el artículo 13, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el diverso 19, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que son válidas aquellas restricciones necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. En el mismo sentido, el numeral 6 constitucional determina que la información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y cuando pueda comprometerse la seguridad nacional en los términos que fijan las leyes.
70. Las resoluciones de los recursos de revisión de seguridad nacional citados en el punto 49 de esta sentencia también explican que, por lo que se refiere al concepto, alcance, supuestos y funcionalidad de la seguridad nacional, como límite al derecho a la información, necesariamente debe atenderse a lo dispuesto tanto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por la Ley de Seguridad Nacional (en adelante LSN).
71. Lo anterior es así porque en la medida en la que el texto constitucional sólo enuncia los fines constitucionalmente válidos para restringir el derecho de acceso a la información, corresponde al legislador, según la determinación del propio constituyente, el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan excepciones tendientes a proteger tales

³⁸ Amparo en revisión 173/2012, fallado por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión de seis de febrero de dos mil trece, por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien se reserva el derecho de formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz (ponente), y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Con voto en contra de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Pardo Rebolledo (Presidente).

fines.

72. El artículo 4 de la LGTAIP establece que toda la información gubernamental es de carácter público y los particulares tendrán acceso a ella en los términos de la propia ley. Asimismo, se establecen excepciones al acceso de la información pública y se agrupan en dos grandes tipos, según sea tutelado un bien de carácter privado o público; esto es, por un lado, lo relativo a la información confidencial y, por otro, la información reservada.
73. Respecto a este último supuesto, relacionado directamente con la materia de análisis de esta sentencia, el mismo artículo en su párrafo segundo³⁹, señala como uno de los criterios para limitar el acceso de los particulares a la información, el hecho de que ésta tenga el carácter de reservada por estar temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la propia ley.
74. En ese sentido, el artículo 113 de la referida ley establece un catálogo genérico de supuestos en los que deberá reservarse la información⁴⁰, lo cual procederá cuando la difusión de ésta se encuentre en alguno de los casos que a continuación se enumeran:
 - I. **Comprometa la seguridad nacional**, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
 - II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y

³⁹ **Artículo 4.** [...]

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley Federal; las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

⁴⁰ En el mismo sentido el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

relaciones internacionales;

- III.** Se entregue al Estado Mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos contra la humanidad de conformidad con el derecho internacional;
- IV.** Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistemático o del sistema financiero del país; pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país; o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;
- V.** Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
- VI.** Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
- VII.** Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
- VIII.** La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
- IX.** Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
- X.** Afecte los derechos del debido proceso;

- XI.** Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
 - XII.** Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; y,
 - XIII.** Las que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.
- 75.** Por su parte, el artículo 116 de la Ley General de la materia prevé los supuestos que deben ser considerados como información confidencial, y que no está sujeta a temporalidad alguna⁴¹.
- 76.** En efecto, esa disposición, enuncia supuestos más específicos que, si bien pueden asimilarse a los señalados en el artículo 113, por lo que se refiere a la finalidad de las reservas, lo cierto es que presentan un nivel de detalle mayor que orienta la labor del aplicador de la norma y de su intérprete judicial en el sentido de considerarlos necesariamente, como información confidencial. Tal característica o nivel de densidad normativa no se presenta en los supuestos a que se refiere el numeral 113, como es el caso de la seguridad nacional.

⁴¹ **Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

77. Ahora bien, por lo que se refiere a la LSN en su artículo 3 establece que por tal concepto deben entenderse las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a cualquiera de los supuestos siguientes:
- I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
 - II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
 - III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
 - IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 - V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y,
 - VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.
78. El artículo 4 prevé que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficacia, coordinación y cooperación.
79. Por su parte, el artículo 5 del mismo ordenamiento señala, de manera más específica, los actos que implican amenazas a la seguridad nacional para efectos de la propia ley, y son los que a continuación se mencionan:

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL
PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA 5/2023**

- I.** Los tendientes a consumir espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria o genocidio dentro del territorio nacional;
- II.** La interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
- III.** Aquellos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
- IV.** Los tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V.** Los orientados a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
- VI.** Los que se comentan en contra de la seguridad de la aviación;
- VII.** Actos que atenten en contra del personal diplomático;
- VIII.** También los tendientes a consumir el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
- IX.** Aquellos ilícitos en contra de la navegación marítima;
- X.** De financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
- XI.** Tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia⁴²; y,
- XII.** Los que puedan destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

⁴² El artículo 29 de la LSN prevé que se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional. Y en términos del diverso 32 de la propia ley, se entiende por contrainteligencia, las medidas de protección de las instancias en contra de los actos lesivos, así como las acciones orientadas a disuadir o contrarrestar su comisión.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

80. Adicionalmente, deberá atenderse a lo dispuesto por el artículo 51 de la misma LSN, contenido en el Capítulo III, del Título Tercero denominado: *Del acceso a la información en materia de seguridad nacional*. Dicho precepto establece que además de la información que satisfaga los criterios establecidos en la legislación general aplicable, es información reservada por motivos de seguridad nacional, la que a continuación se menciona:

- I. Aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent, o
 - II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza.
81. Es importante advertir que, en términos de la propia LSN, el artículo 8, fracción V, establece que tratándose de la información de seguridad nacional se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental⁴³.
82. Finalmente, la LSN en su artículo 3; hace énfasis en el conjunto de bienes tutelados bajo el amparo del concepto de seguridad nacional. Esto es así, porque en ese ordenamiento son bienes protegidos la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; la estabilidad de las instituciones de la Federación; la gobernabilidad democrática; la defensa exterior; y la seguridad interior de la Federación; los cuales tienen como objetivo garantizar, a su vez, el

⁴³ De conformidad con el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a la armonización de las leyes relativas; debe entenderse la referencia hecha a la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

bienestar social como uno de los fines del Estado constitucional.

83. Los supuestos específicos en los que se entiende que podría comprometerse la seguridad nacional, de acuerdo con la LGTAIP, y los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como con la LSN, deben interpretarse de forma complementaria.
84. Lo anterior, porque el artículo 113, fracción XIII, de la citada LGTAIP señala que también debe ser considerada como reservada, aquella información que así lo sea por disposición expresa de una ley, como lo es el caso de la LSN, en su numeral 8, fracción V.
85. Por tanto, en el presente asunto deberá determinarse si la entrega de **la versión pública** de la resolución recaída al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, es información que atenta contra la seguridad nacional.
86. Por ello, para clasificar como reservada la información en cuestión, es insuficiente que su contenido esté directamente relacionado con los aspectos de seguridad nacional que pretende proteger, pues, además deberán considerarse las razones objetivas que permitan determinar si la difusión de la información efectivamente causaría un daño real, demostrable e identificable a los intereses jurídicos tutelados.

VII. SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN.

87. Ahora bien, para la resolución de este asunto se retoma lo expuesto en el apartado de la materia de la revisión y de las documentales ahí relacionadas, este Tribunal Pleno puntualiza que la materia de la

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

solicitud de información que el INAI instruyó entregar al sujeto obligado es la siguiente:

[...]

Proporcione a la persona solicitante **la versión pública** de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en la que **únicamente** deberá proteger la información que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (página 107), **por seguridad nacional**, en términos del artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. [...]

88. En ese orden de ideas, tomando en cuenta lo expuesto por el INAI, respecto de la información que atañe al trámite de modificación de uso de suelo forestal y la conclusión relativa a que no se puede reservar esa documental por seguridad nacional -como lo hizo el sujeto obligado- con base en el Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacio, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como de los aeropuertos; dado que existe una prohibición de emitir acuerdos que clasifiquen documentos o información reservada, de forma anticipada y general⁴⁴, este Alto Tribunal concluye, que lo efectivamente solicitado por el particular consiste en la resolución recaída el proyecto identificado con el número

⁴⁴ Aspecto que no fue controvertido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y sin que lleguen a calificarse de inoperantes los agravios, en virtud de que atendiendo a lo establecido por este Alto Tribunal, la naturaleza y alcance del recurso de revisión en materia de seguridad nacional no implica el análisis de cuestiones de legalidad.

23QR2022V0050, denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, específicamente, la que tiene que ver con la respuesta al trámite de la autorización del cambio de uso de suelo forestal para la ejecución del citado proyecto.

VIII. ESTUDIO.

89. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugna la resolución del INAI y sostiene que la entrega de la versión pública de la resolución solicitada pone en riesgo la seguridad nacional. En esencia, aduce que esa información forma parte de un procedimiento de trámite unificado del cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, para el desarrollo de un proyecto cuya naturaleza está clasificada.
90. A continuación, se sintetizan los agravios expuestos en el recurso de revisión y, posteriormente, se analizan en forma conjunta.

Primer agravio.

91. La recurrente sostiene que el proyecto sobre el que se solicitó la información tiene que ver con la *Construcción de una Base Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto (Tulum, Quintana Roo)*, y que, por su ubicación geográfica resulta estratégico para la vigilancia y control del espacio aéreo en la frontera sur, lo que permite la detección e intercepción oportuna de aeronaves no identificadas que pudieran realizar actos ilícitos en contra de la integridad territorial y la seguridad nacional.
92. Al respecto, afirma que permitir el acceso a la totalidad de la información potencializa un riesgo o amenaza a la soberanía de la Nación y, en consecuencia, se debe confirmar la clasificación de reserva en materia de seguridad nacional prevista en el artículo 110, fracción I, de la LFTAIP en relación con el numeral Decimoséptimo, fracción VIII y

párrafo último, de los Lineamientos Generales, como lo hizo el sujeto obligado.

Segundo agravio.

93. Es falso que el sujeto obligado haya fundado la clasificación de información en el *Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transparencia, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público*, publicado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.
94. Contrario a lo que sostuvo el INAI, la resolución se fundamentó en los artículos 110, fracción I, de la LFTAIP y 104 y 113, fracción I, de la LGTAIP, en relación con los diversos 6, fracción II y 54 de la LSN, el artículo Único del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés y el numeral Décimo noveno, párrafo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; es decir, realizó el análisis del caso concreto y previa valoración de las características de la solicitud, determinó que se actualizaba la causal de reserva por cuestiones de seguridad nacional.
95. Para ello, sostiene que en términos del artículo 104 de la LGTAIP, la clasificación de la información se justificó al actualizarse los elementos del daño que puede ocasionarse si se difunde la información.
96. Al efecto, repite o reitera lo que el sujeto obligado consideró en la prueba de daño expuesta en la respuesta a la solicitud de información.

97. Tercer agravio.

98. La autorización en materia de impacto ambiental proviene de un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental previsto en la LGEEPA, en el que la autoridad realiza un análisis integral y holístico del proyecto sometido a su consideración; lo anterior, de acuerdo con su naturaleza, características, distribución espacial de obras y actividades y servicios principales. De ahí, que la autoridad al emitir la autorización en materia de impacto ambiental -en el caso, el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B- se está pronunciado sobre el proyecto en su integridad.
99. Por esa razón, la recurrente reitera que al permitir que se difunda la información sobre la *“Autorización Provisional, que da cuenta del avance a la remoción y desmonte en la superficie solicitada, la cual está dividida en polígono tipo de vegetación, superficie total, superficie dividida y avance de desmonte”*, se pone en riesgo la seguridad nacional, pues, se está divulgando información que se puede aprovechar para conocer la superficie total, polígonos específicos en los predios, las características físicas y naturales de los mismos, de la cual se pueden deducir las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto sobre el que versa la resolución solicitada.
100. Al permitir que se difunda la información sobre la vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos aplicables; así como las estrategias y programas de ordenamiento territorial, Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo, diversas Normas Oficiales Mexicanas y su respectiva vinculación en el proyecto, se potencializa la existencia de un riesgo inminente a la seguridad nacional.
101. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostiene que la difusión de la clasificación parcial de la información contenida en la resolución tiene como consecuencia la destrucción o inhabilitación de la infraestructura

estratégica para la provisión de bienes y servicios, como lo son las vías generales de comunicación. Agrega, que en atención a la teoría del mosaico conocer el polígono con la superficie del aeropuerto que da cuenta del avance de la remoción y desmonte empleado, puede servir a las personas integrantes de la delincuencia organizada conozcan mayores datos respecto de la operatividad del aeropuerto.

102. Entregar la información de manera fragmentada contraviene la naturaleza jurídica de los datos que integran esa documentación.
103. Este Tribunal Pleno considera que son **infundados** los agravios expuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por las razones que se explican a continuación. Para el estudio de fondo del presente asunto, se clasifica en tres temas.

Tema 1. La información relacionada con el derecho a un medio ambiente sano no pone en riesgo la seguridad nacional.

104. En primer lugar, no le asiste la razón a la recurrente, en el sentido de que el acceso a la totalidad de la información potencializa un riesgo o amenaza a la seguridad nacional porque, como se explicó en el considerando de la materia de la revisión, lo que en realidad autorizó el INAI es que el sujeto obligado entregara al solicitante, ese **la versión pública** de la resolución dictada en el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, recaída al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, en los términos indicados en la propia resolución ahora recurrida.
105. Es decir, el Instituto **no autorizó** la entrega de la información

relacionada con las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, concretamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y el total de operaciones, el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero, por estar clasificada en términos de los artículos 113, fracción I, de la LGTAIP y 110, fracción I, de la LFTAIP, así como en el Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos para el desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público.

106. Consecuentemente, el estudio en este asunto radica en determinar si la resolución que recayó al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*” y que involucra, propiamente, el derecho de acceso a la información en un tema de derecho medio ambiental, debe ser información clasificada como reservada por seguridad nacional.
107. En ese orden de ideas, al advertirse que el tema en estudio involucra el derecho de acceso a la información en relación con el derecho a un medio ambiente sano, se hace referencia a diversos conceptos y a las facultades de la SEMARNAT, relacionadas con un trámite de cambio de uso de suelo forestal para la Construcción de una Base Militar y un Aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, respecto del cual un particular presentó la solicitud de información de donde deriva este asunto.

108. Así, cabe mencionar que está definido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (en adelante LGDFS), que el cambio de uso de suelo en terreno forestal implica la remoción total o parcial de la vegetación forestal para destinarlos o inducirlos a actividades no forestales⁴⁵.
109. La SEMARNAT, entre sus facultades, tiene la de expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales⁴⁶.
110. En términos de lo previsto por el artículo 93 de la LGDFS, la SEMARNAT sólo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos, con los que demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantendrán; y que la erosión de los suelos, la capacidad de almacenamiento de carbono, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitigarán en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.
111. Las autorizaciones que emita la Secretaría deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la flora y fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, las cuales deberán sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, así como las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
112. El mismo precepto, esto es, el artículo 93 prevé que, en relación con los terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso de suelo deberá acompañarse de medidas de consulta previa,

⁴⁵ Artículo 7, fracción VI, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

⁴⁶ Artículo 14, Fracción XI, de la misma ley.

libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación aplicable y para ello, la Secretaría se coordinará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

113. Ahora bien, este Tribunal Pleno advierte de la propia resolución del INAI⁴⁷, que el Instituto tuvo a la vista la resolución del trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, Modalidad B, identificado como trámite SEMARNAT-09-001-B y de la misma, describió el trámite correspondiente, es decir, señaló cómo es que se debe llevar a cabo y los documentos necesarios para dar respuesta a la solicitud de modificación de uso de suelo, cómo se brindará la información; así como la documentación necesaria para la evaluación de la manifestación del impacto ambiental.

114. En ese sentido y una vez sustanciado el procedimiento, la SEMARNAT deberá emitir una resolución debidamente fundada y motivada en la que podrá resolver lo siguiente:

- Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones manifestados;
- Autorizar total o parcialmente la realización de la obra o actividad de manera condicionada. En el caso, la SEMARNAT podrá sujetar la realización de la obra o actividad a la modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención o mitigación que tengan por objeto evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, operación normal, etapa de abandono, término de vida útil del proyecto o en caso de accidente;
- Negar la autorización en términos de la fracción III del artículo 36 de la LGEEPA.

⁴⁷ Referida y transcrita en algunos apartados, en las páginas 42 a 46 de la resolución impugnada en este recurso y que no es controvertida por la recurrente.

115. Hasta aquí la descripción del INAI respecto del trámite que a su vez, lleva a cabo la autoridad en relación con las solicitudes de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
116. En relación con lo anterior, el artículo 143 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable regula el procedimiento que deberá seguir la SEMARNAT y, a su vez, el numeral 144 del mismo ordenamiento, establece que determinará el monto económico de compensación ambiental correspondiente, de conformidad con el diverso 152 del Reglamento y notificará al solicitante para que realice el depósito respectivo, en un plazo que no exceda de treinta días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación; y la autorización será negada en caso de que el interesado no acredite ante la Secretaría haber realizado el depósito.
117. De todo lo anterior, lo que interesa destacar es que el sujeto obligado al emitir la resolución correspondiente a la solicitud del trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, Modalidad B, debe observar que el cambio de uso de suelo **no comprometa la biodiversidad ni se provoque la erosión de los suelos, el deterioro del agua o la disminución en su captación y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo**⁴⁸.
118. Ahora bien, el solicitante en uso de su derecho de acceso a la información, requirió precisamente el contenido de la respuesta al trámite multicitado, por parte de la autoridad que tiene a su cargo la supervisión de los cambios de uso de suelo forestales y el cumplimiento de lo previsto en la normatividad medio ambiental; y son esos datos o

⁴⁸ Así, estaba previsto en el 117 de la ley anterior y que fue citado por el INAI en su resolución.

ese informe, lo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostiene que se trata de información reservada por seguridad nacional y que, por ello, debe permanecer clasificada en los términos que señaló el sujeto obligado.

119. Para determinar si tiene razón la recurrente en su planteamiento, se debe hacer referencia al régimen constitucional aplicable a la información relacionada con un tema medio ambiental, precisando los alcances y particularidades del derecho de acceso a la información en relación con el derecho fundamental a un medio ambiente sano reconocidos en los artículos 4, párrafo quinto⁴⁹, y 6 de la Constitución Federal⁵⁰, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que rigen estos derechos fundamentales.
120. En relación con lo anterior es aplicable lo que este Tribunal Pleno, recientemente, sostuvo al resolver los recursos de revisión en materia

⁴⁹ **Artículo 4o.** La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.[...]
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. [...]

⁵⁰ **Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: [...]

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

de seguridad nacional 10/2022⁵¹ y 12/2022⁵², en específico la parte relativa al régimen constitucional indicado. Entre las consideraciones expuestas en esos asuntos, se retoman las siguientes.

121. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existen particularidades establecidas por la Constitución Federal respecto de la información relacionada con el medio ambiente, ya que de los preceptos constitucionales referidos existe la obligación a cargo del Estado de ejercer de manera correcta las acciones de vigilancia, conservación y prevención necesarias para mantener y mejorar el entorno ambiental⁵³, con el objetivo de garantizar a todas las personas, la más alta calidad de vida posible.
122. Se debe tener presente que en su dimensión individual deben considerarse las repercusiones directas o indirectas sobre las personas, incluyendo su salud, integridad personal o a la vida; mientras que la dimensión colectiva implica un interés universal debido a las

⁵¹ Resuelto el seis de febrero de dos mil veinticuatro, por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de consideraciones, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa apartándose de los párrafos 31 al 40, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo por consideraciones distintas, Ríos Farjat en contra de consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán apartándose de los párrafos 44 al 47 y Piña Hernández en contra de consideraciones. Voto en contra de las Ministras Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama.

⁵² Resuelto el ocho de febrero de dos mil veinticuatro, por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena apartándose de consideraciones, González Alcántara Carrancá (Ponente), Esquivel Mossa apartándose y en contra de algunas consideraciones Aguilar Morales, Pardo Rebolledo por consideraciones distintas, Ríos Farjat apartándose de consideraciones, Laynez Potisek, Pérez Dayán apartándose de consideraciones y Presidenta Piña Hernández apartándose de las consideraciones, respecto de los considerandos séptimo y octavo relativos respectivamente, al estudio y la decisión, consistentes en declarar infundado el recurso y confirmar la resolución. Votaron en contra las Ministras Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama.

⁵³ Véase las consideraciones contenidas, entre otros, en las resoluciones del Tribunal Pleno, controversia constitucional 95/2004, de dieciséis de octubre de dos mil siete; y en el amparo directo en revisión 5452/2015 de la Primera Sala, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis.

generaciones presentes y futuras⁵⁴.

123. Lo anterior, reconociendo que “los seres humanos son parte de la naturaleza y nuestros derechos humanos están interrelacionados con el entorno en que vivimos [...]” y el ejercicio de esos derechos contribuye a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible⁵⁵. En ese sentido, es posible afirmar la existencia de una conexión necesaria entre la dimensión objetiva del derecho a un medio ambiente sano que considera el medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo; y su vertiente subjetiva como un derecho subjetivo que tienen todas las personas para garantizar su realización y vigencia⁵⁶.
124. Cabe señalar, que, la obligación a cargo del Estado derivada del derecho a un medio ambiente sano también conlleva la corresponsabilidad de los particulares en la prevención y protección ambiental⁵⁷, esto es, que los deberes relacionados con la protección del medio ambiente no son exclusivos de las entidades públicas, sino que los particulares también están obligados directamente a la protección

⁵⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17 (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal – interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los diversos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), de quince de noviembre de dos mil diecisiete, serie A no. 23, párr. 59; en el mismo sentido, Primera Sala, Controversia Constitucional 212/2018, de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, párr. 151-152.

⁵⁵ Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 37° periodo de sesiones, veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, A/HRC/37/59, Anexo, párr. 1.

⁵⁶ Amparo en revisión 307/2016, de la Primera Sala resuelto en sesión del catorce de noviembre de dos mil dieciocho; controversia constitucional 89/2020 de la Segunda Sala resuelta el tres de febrero de dos mil veintiuno; Primera Sala en el amparo en revisión 578/2016 de primero de febrero de dos mil diecisiete; y el amparo en revisión 953/2019, de seis de mayo de dos mil veinte también de la Segunda Sala.

⁵⁷ Véanse Tribunal Pleno, controversia constitucional 95/2004, de dieciséis de octubre de dos mil siete, pp. 205 y ss.; Primera Sala, amparo directo en revisión 5452/2015, de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, pp. 21 y ss.; y, Segunda Sala, amparo en revisión 641/2017, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, pp. 21 y ss.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

del medio ambiente y se le pueden asignar obligaciones y deberes legales.

125. Asimismo, se debe destacar que la interrelación entre derechos sería ineficaz e incompleta sin la implementación plena y efectiva de ciertos derechos que establezcan cauces para dicho fin. Al respecto, debemos enfatizar la existencia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe⁵⁸, - en lo sucesivo el Acuerdo de Escazú- un tratado internacional que, como su propio nombre lo indica, establece ciertas obligaciones para los Estados Parte para permitir el acceso a información ambiental, fortalecer los cauces de participación pública en la toma de decisiones, así como establecer medidas para el acceso a la justicia en asuntos ambientales⁵⁹.
126. El tratado internacional antes referido, al establecer de manera clara la relación existente entre el ambiente y los derechos humanos -conforme con lo establecido en su preámbulo- conlleva a que aquellas acciones en donde se encuentren involucrados los derechos de acceso a la información, de participación pública o de acceso a la justicia, todos ellos en materia ambiental, deben ajustarse a las bases ahí establecidas, así como considerar los posibles alcances y

⁵⁸ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno.

⁵⁹ En el plano internacional se tiene que señalar la existencia de diversas declaraciones, informes y principios que se han desarrollado en los últimos treinta años respecto del acceso a la información ambiental como una garantía "procedimental" indispensable, tales como Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, tres a catorce de junio de mil novecientos noventa y dos; Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, Informe Final de la Relatora Especial, Sra. Fatma Zohra Ksetini, 46° periodo de sesiones, E/CN.4/Sub.2/1994/9, Anexo I; Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute a un medio ambiente sin riesgos, limpios, saludable y sostenible, op. Cit.

consecuencias que podrían derivarse para el ambiente y para el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales.

127. Al respecto, se debe precisar que estas disposiciones fueron adoptadas con la intención de establecer la concepción más amplia posible de lo que se debe comprender por información ambiental, señalando en su artículo 2, inciso c, que por ésta *“se entiende cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”*.
128. Por otro lado, dicho artículo 2, inciso b, del mismo Acuerdo, dispone que las autoridades públicas para efectos del acceso a la información ambiental incluyen a toda institución que ejerce los poderes, la autoridad y las funciones en materia de acceso a la información, incluyendo órganos autónomos propiedad del Estado o controlados por él, que actúen por facultades otorgadas constitucional o legalmente y, cuando corresponda, a organizaciones privadas, en la medida que reciban fondos o beneficios públicos o desempeñen servicios públicos, en este último caso limitado a la utilización de estos fondos o servicios desempeñados.
129. Lo anterior, desde luego, con el reconocimiento de que el Estado, derivado de la soberanía que ejerce sobre su territorio, es el primer y principal obligado para la determinación, uso y supervisión que se realice en este y garantizar que el desarrollo nacional sea sustentable, ya sea por acciones realizadas directa o indirectamente bajo su control, tal y como se deriva de los artículos 25, párrafo primero y 27 de la

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

130. En consecuencia, el contenido material y subjetivo de aplicación del tratado internacional bajo análisis se desarrolla, por un lado, en una serie de obligaciones de transparencia que deben generarse y divulgarse de manera proactiva conforme con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo de Escazú, así como ciertas reglas específicas cuando una persona solicite información ambiental a las autoridades de conformidad con el numeral 5 del mismo Acuerdo.
131. En efecto, el propio artículo 5 del Acuerdo de Escazú, reafirma en gran medida los parámetros reconocidos constitucionalmente y haciéndolos explícitamente aplicables para aquellos casos de información ambiental, tales como la vigencia del principio de máxima divulgación, la obligación de responder de manera expedita, completa y accesible, la no necesidad de indicar los motivos o intereses por los cuales se busca acceder a la información y que este derecho está sujeto a un régimen limitado de excepciones, mismas que deberán estar establecidas por ley y ajustarse a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
132. En el caso, resulta necesario mencionar, que el mismo artículo 5, párrafo octavo, establece que en los supuestos en donde se considere que se actualice alguna de las excepciones del derecho de acceso a la información en materia ambiental, la carga de la prueba recae en la autoridad competente; y este requisito es acorde con lo que se ha establecido en jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de acceso a la información, la cual de manera expresa señala lo siguiente:

La Corte ha establecido que los Estados se encuentran en la obligación

de suministrar la información solicitada. Sin embargo, en caso de que proceda la negativa de entrega, deberá dar una respuesta fundamentada que permita conocer cuáles son los motivos y normas en que se basa para no entregar la información. De esta manera, analizando dicha decisión se podrá determinar si tal restricción es compatible con las restricciones permitidas por la Convención Americana, esto es, aquellas que sean legales, necesarias, proporcionales, con el fin de lograr un objetivo legítimo y que respondan a un interés general en el marco de una sociedad democrática. En los casos en que no se obtiene una respuesta del Estado la Corte entiende que además de la violación del artículo 13 de la Convención, tal actitud supone una decisión arbitraria. En razón de esto, es necesario que la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información recaiga en el órgano al cual la información fue solicitada⁶⁰.

133. Este elemento es parte esencial para la eficacia del derecho de acceso a la información en materia ambiental e integra su parámetro de regularidad constitucional.

134. Ahora bien, en el caso específico, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostiene que la divulgación de la versión pública de la resolución recaída al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con Riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo*”, pone en peligro la seguridad nacional, por las siguientes razones:

- Es información que contiene datos de los que pueden deducirse características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto de referencia y ello, pone en peligro la seguridad nacional.
- De ser difundida esa información, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura estratégica para la provisión de los bienes y servicios, como lo son las vías generales de comunicación, en

⁶⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblos Kaliña y Lokono vs. Surinam, fondo, reparaciones y costas, sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil quince, serie C no. 309, párr. 262.

términos de lo previsto en el artículo 110, fracción I, de la LFTAIP, en relación con el Decimoséptimo, fracción VIII y párrafo último, de los Lineamientos Generales.

- Divulgar la información de manera fragmentada contraviene la propia naturaleza jurídica de los datos que integran dicha resolución.
 - Se trata de información que proviene de un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental previsto en la LGEEPA, en donde la autoridad competente debe realizar un análisis integral y holístico del proyecto, de acuerdo con su naturaleza y distribución espacial de las obras y actividades.
135. Como se puede ver, todos sus argumentos están dirigidos a sostener la reserva de las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto -información que el INAI confirmó como clasificada por seguridad nacional y como se dijo, no es materia de estudio en este recurso-; y además, como cuestión importante, la recurrente no justifica ni demuestra que la restante información, relacionada con las consideraciones que involucran la materia medio ambiental, como lo son las que tienen que ver con el cambio del uso de suelo forestal, deban permanecer reservadas por razones de seguridad nacional; y el sujeto obligado al dar respuesta tampoco expresó las razones para reservar dicha información, y además, este Alto Tribunal no advierte que la información relacionada con el medio ambiente deba ser reservada por seguridad nacional.

Tema 2. No es procedente la reserva de la información por seguridad nacional, con base en un decreto que así la clasifica de manera anticipada y general.

136. El proyecto materia de la solicitud es sobre la construcción de una base aérea civil militar y del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto,

respecto del cual, el sujeto obligado hizo valer la causal de reserva prevista en la fracción I del artículo 110 de la LFTAIP y también clasificó la información con base en el *“Decreto por el que la construcción funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, los bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”*, publicado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés.

137. En ese orden de ideas, también **es infundado** el argumento en el que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal aduce que entregar la versión pública de la resolución, testando la información clasificada, sigue poniendo en riesgo la seguridad nacional porque la naturaleza estratégica del proyecto en cuestión forma parte de un procedimiento de trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, Modalidad B y, ello implica, un riesgo para el desarrollo de un proyecto, cuya naturaleza está clasificada como de seguridad nacional, ya que resulta estratégico para la vigilancia y control del espacio aéreo.
138. Para explicar las razones de esta conclusión, se retoman en este asunto las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno al resolver la controversia constitucional 217/2021, en virtud de que son aplicables por analogía.
139. En ese asunto, se declaró la invalidez del *“Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”*, publicado el veintidós de noviembre de dos mil

veintiuno⁶¹.

140. Ahora bien, en esa sentencia se establecieron, en lo que interesa para el presente caso, las siguientes premisas⁶²:

- Del marco normativo constitucional y legal, y de la interpretación realizada por el Tribunal Pleno sólo es posible clasificar la información como reservada por causas de interés público o seguridad nacional, aplicando una prueba de daño en cada caso.
- Las bases para desarrollar la prueba de daño están contenidas en la LGTAIP, y por lo que hace a las causales de reserva, se conciben supuestos puntuales, pero no limitativos, permitiendo su desarrollo o adición en otras leyes.
- El Acuerdo impugnado no hace una mención explícita de la información y a su clasificación como reservada. Lo que hace es declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociadas con infraestructura de ciertos sectores, o que, por sus características, naturaleza, y magnitud, se consideran prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.
- La declaratoria contenida en el Acuerdo tiene como consecuencia la inclusión de información que no cabe dentro de la excepción constitucional y que ahora puede ser reservada por las

⁶¹ Resuelta el por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Ríos Farjat, Laynez Potisek con consideraciones adicionales, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández con razones adicionales, respecto del apartado VIII, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo primero del Acuerdo. Con voto en contra de las Ministras Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf y del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea.

⁶² Véase el apartado VIII.1. La declaratoria de interés público y seguridad nacional de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México en el Acuerdo impugnado.

autoridades correspondientes al momento de su clasificación. Esto equivale a ampliar el supuesto de reserva de información a través de un acto administrativo.

- El Tribunal Pleno considera que el Acuerdo, al colocar toda la información relativa a las obras y proyectos referidos bajo el supuesto de reserva de información, genera un régimen de opacidad con un efecto inhibitor tanto para la transparencia de los sujetos obligados de la Administración Pública Federal como para el ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso a la información.
 - En suma, el Acuerdo no constituye explícitamente una causal de reserva de información; pero, al declarar que ciertas obras y proyectos relacionadas con numerosos sectores, son de interés público y seguridad nacional, sitúa toda la información generada en el desarrollo de éstas dentro del supuesto de reserva de información pública del artículo 113, fracción I, de la LGTAIP.
141. Esas consideraciones, como ya se dijo, son aplicables para sostener también que el *“Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican, son de seguridad nacional y de interés público”*, citado como justificación para reservar la información materia de este asunto, no debe ser fundamento para declararla como reservada, en virtud de que el objeto de dicho decreto, también es reservar de forma anticipada y general la información relacionada con las obras del Tren Maya y de los Aeropuertos en Quintana Roo.

142. De ahí, válidamente se puede sostener que es infundado el agravio de la recurrente porque, como ha quedado establecido en el precedente citado y que resulta aplicable ahora, un decreto o acuerdo que obstaculiza el principio de máxima publicidad y, específicamente, al tratarse de información que involucra el derecho a un medio ambiente sano en beneficio de la sociedad en general, no es fundamento para reservar la información solicitada por el particular en este asunto.
143. Lo anterior, debido a la limitación para el Ejecutivo Federal de reservar este tipo de construcciones y de proyectos como de interés público y de seguridad nacional de forma anticipada.
144. Además de lo anterior, cabe recordar que tanto el sujeto obligado como el INAI realizaron en términos del artículo 104 de la LGTAIP, la prueba de daño y como resultado este último, resolvió lo siguiente:
- [...] este Instituto considera que se acredita la clasificación como reservada, con fundamento en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente por lo que se refiere a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente, las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones (páginas 35 a 52), el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto (página 77) y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero (página 104).
145. Es decir, el INAI clasificó la información relacionada con las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, pero **instruyó** al sujeto obligado para que entregara una **versión pública** de la resolución solicitada y relacionada con el trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado “*Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional*”

Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”.

146. Ahora bien, este Alto Tribunal no deja de advertir que ahora la recurrente refiere la prueba de daño, tal y como fue expuesta por el sujeto obligado; sin embargo, se limita reiterarla; pero, no controvierte el procedimiento ni el resultado de esa prueba ni la realizada por el INAI. Incluso, en términos de la prueba de daño expuesta, nada dice respecto de la información específica y relacionada con la que involucra al medio ambiente, la cual, es la que interesa de forma específica al solicitante.
147. Lo anterior, en virtud de que lo que interesa de la resolución del trámite denominado “Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”, respecto del cambio unificado de uso de suelo forestal, es lo que se debió de demostrar conforme con la prueba de daño que pudiera afectar la seguridad nacional, como lo afirma la recurrente.
148. Pero, además, este Tribunal Pleno considera que no es necesaria la realización de la prueba de daño respecto de la información que involucra únicamente la respuesta relacionada con el cambio de uso de suelo forestal en la zona en donde se están realizando las construcciones mencionadas en el proyecto.
149. Lo anterior, en virtud de que como ha quedado expuesto, en términos de los parámetros constitucionalmente reconocidos y aplicables en los casos de acceso a la información ambiental -tales como la vigencia del principio de máxima divulgación, completa y accesible para los solicitantes-, es procedente la entrega de la versión pública de la resolución correspondiente al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal identificada con número 23QR2022V0050, precisamente porque es de interés público.

Tema 3. Es procedente la entrega de la versión pública de la resolución del trámite al cambio de uso de suelo forestal.

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

150. Por último, es infundado el agravio relativo a que la resolución recaída al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad B, con riesgo, número 23QR2022V0050, no puede ser fragmentada, reservando solo la que involucra las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, tal y como lo resolvió el INAI, en virtud de que de cualquier modo se estaría divulgando información que atañe al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.
151. Se dice que es infundado el agravio en virtud de que, primero, la recurrente no demuestra qué parte, en particular, del procedimiento administrativo de impacto ambiental contiene características técnicas y concretas de ubicación y coordenadas del proyecto; y segundo, todo lo que se refiere a las características específicas y técnicas de las instalaciones del aeropuerto, como las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de combustible de almacenamiento, medios de suministro de combustible, el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del aeropuerto y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero, es información que sí permanece reservada por razones de seguridad nacional.
152. Por ello, este Tribunal Pleno considera que no se corre el riesgo de que se esté fragmentando la resolución y con ello se esté revelando información reservada. Al respecto, no resulta aplicable lo que se resolvió en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 1/2017, en virtud de que no se trata del mismo supuesto que ahora se analiza. En ese asunto, se determinó que de brindar la información de forma integral, como las rutas, lugares de origen y destino, horas de salida y de llegada de todo tipo de aeronaves de la flota presidencial, aunque se tratara de información en el pasado, se estaría entregando

la información relacionada con las acciones de protección por parte del Estado Mayor Presidencial, tratándose de la gestión o manejo de las aeronaves y de la protección de sus pasajeros y con ello, se posibilitaría la generación de patrones de vuelo.

- 153.** En el caso particular, la versión pública de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal no implica que se esté entregando la información en su integridad como lo afirma la recurrente. La circunstancia de que se revele la información relacionada con la autorización de uso de suelo forestal y, que ello, pudiera implicar la ubicación de la extensión que abarca dicha autorización de uso de suelo, no significa que se estén revelando las coordenadas de ubicación de las construcciones de las respectivas obras.
- 154.** Además, no hay ningún medio de convicción para sostener que la divulgación de la versión pública de la resolución materia de la solicitud de información, podría significar una amenaza a la seguridad nacional al constituir un acto tendiente a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de los servicios de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones e información aeronáuticas.
- 155.** Por lo contrario, debe existir evidencia para acreditar la actualización de un supuesto determinado y de probable vulneración a la seguridad nacional sobre la información que se busca reservar; además de explicar cómo es que la resolución impugnada podría tener dicha consecuencia. Y es, precisamente, respecto del contenido relacionado con el derecho de acceso a la información que, a su vez, involucra el derecho a un medio ambiente sano, que la Consejería nada expone para demostrar qué parte debe ser reservada por seguridad nacional.
- 156.** Por las razones antes desarrolladas, no es posible sostener que se actualiza la causal de excepción debido a la seguridad nacional para el

derecho de acceso a la información solicitada por el particular. Así como tampoco existen elementos para sostener la existencia de un interés en este contexto que sobrepase aquél de la colectividad en general de estar en posibilidad de conocer información relacionada con el derecho a un medio ambiente sano.

157. Luego, en tanto que la excepcionalidad del presente medio de defensa implica que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente pueda revisar aquellas cuestiones que atañen a la estricta hipótesis de reserva por razones de seguridad nacional, no resulta admisible examinar la legalidad de las resoluciones del INAI, por lo que se determina que es dable otorgar la información en versión pública de la materia de la solicitud.

IX. DECISIÓN.

158. Conforme con las razones expuestas en el anterior apartado resulta **infundado** el recurso de revisión y, por ende, lo procedente es **confirmar** la resolución recurrida.
159. Por tanto, el sujeto obligado deberá entregar **la versión pública** de la resolución al trámite unificado de cambio de uso de suelo forestal, modalidad b, con riesgo, número 23 QR2022V0050, correspondiente al proyecto denominado *“Construcción de una Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto Tulum, Quintana Roo”*, **en las que únicamente deberá proteger la información que se refiere** a las características técnicas y específicas de las instalaciones del aeropuerto, específicamente las coordenadas de los polígonos, el consumo y almacenamiento por etapas del procedimiento, capacidad de almacenamiento, medios de suministro de combustible y total de operaciones, el mapa con la ubicación, dimensiones y coordenadas del

aeropuerto y la imagen que da cuenta del polígono vinculado con el aeropuerto y un acuífero, por seguridad nacional.

160. Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Es procedente pero **infundado** el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional.

SEGUNDO. En la materia del recuso, se **confirma** el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión RRA 9855/23, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil veintitrés.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, archívese el mismo como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández, respecto de los apartados del I al V relativos, respectivamente, a la competencia, a la procedencia, a la legitimación, a la oportunidad y a la materia del recurso de revisión.

En relación con el punto resolutivo segundo:

**RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
NACIONAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA 5/2023**

Se aprobó por mayoría de siete votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá separándose del párrafo 148, Aguilar Morales apartándose de los párrafos 56, 135, 146, 148, 151 y 155 y con razones adicionales, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández separándose de los párrafos 67, 88, 135 y del 138 al 143, de la nota al pie de página número 44 y por razones adicionales, respecto de los apartados VI, VII y VIII relativos, respectivamente, al aspecto preliminar, a la solicitud de la información y al estudio. Las señoras Ministras Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf y Batres Guadarrama votaron en contra. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández anunció voto concurrente.

El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no asistió a la sesión de dos de julio de dos mil veinticuatro por gozar de vacaciones, al haber integrado la comisión de receso correspondiente al primer período de sesiones de dos mil veintiuno.

La señora Ministra Presidenta Piña Hernández declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman la señora Ministra Presidenta y el señor Ministro Ponente con el Secretario General de Acuerdos, quien da fe.

PRESIDENTA

MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ

PONENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

Esta foja corresponde a la sentencia del **recurso de revisión en materia de seguridad nacional previsto en la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública 5/2023**. Promovente: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fallado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del **dos de julio de dos mil veinticuatro**, en el sentido siguiente: **PRIMERO. Es procedente pero infundado el presente recurso de revisión en materia de seguridad nacional. SEGUNDO. En la materia del recuso, se confirma el sentido de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dictada en el recurso de revisión RRA 9855/23, en sesión celebrada el tres de octubre de dos mil veintitrés. Conste.**